

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA POR LA SÍNDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS DE FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

ANTECEDENTES

I. El diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco¹, se recibió en Oficialía de Partes del Instituto, el oficio 091/2025, firmado por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, dirigido a las y los integrantes de este Consejo General, a efecto de solicitar el ejercicio de su facultad interpretativa, con el propósito de otorgar certeza respecto de la titularidad de la Séptima Regiduría por el principio de Representación Proporcional de citado Ayuntamiento².

En dicha consulta, se exponen diversos hechos que, a criterio de la consultante, involucran el análisis de requisitos de elegibilidad para el ejercicio del cargo electivo, la protesta del cargo, la existencia de medidas cautelares no firmes en el caso concreto al que se alude en los antecedentes de la consulta, así como la referencia a solicitudes ciudadanas que impactan directamente en la integración y funcionamiento del órgano de gobierno municipal consultante, en su apreciación, materia estrictamente electoral y de competencia de este Instituto.

Dicha consulta, a continuación, que se transcribe a su literalidad:

**"INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO (IEQROO)
P R E S E N T E**

Quien suscribe **C. ROSILENE DE RUBI CARVAJAL PECH**, en mi carácter de Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo, tal y como lo acredito con la copia de mi constancia de Mayoría y Validez de la elección de Presidencia Municipal de fecha 09 de junio de 2024, expedido por el Instituto Electoral de Quintana Roo (**IEQROO**) a través del Consejo Municipal de José María Morelos, la cual se exhibe en copia debidamente certificada por la Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de conformidad con la fracción VIII del artículo 120 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, respetuosamente comparezco ante este órgano superior de dirección, con fundamento en los **artículos 17 y 137 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (LIEQROO)**, a efecto de solicitar el ejercicio de su facultad interpretativa, con el propósito de

¹ En lo siguiente la referencia a la anualidad corresponderá al dos mil veinticinco, salvo mención expresa en contrario.

² En adelante la consulta.

otorgar certeza respecto de la titularidad de la **Séptima Regiduría por el principio de Representación Proporcional** del Honorable Ayuntamiento del Municipio de **José María Morelos**.

Es particularmente relevante la observancia del **artículo 17 LIPEQROO**, que establece los **requisitos de elegibilidad para integrar Ayuntamientos**, los cuales deben verificarse sobre la base de **resoluciones firmes** cuando exista una causa de impedimento o de restricción para ejercer el cargo.

En la situación que aquí se plantea, la posible superación del impedimento del **C. JOSÉ FRANCISCO PUC CEN** depende de una resolución **no firme** sujeta a recurso, lo cual genera un escenario jurídico que exige la intervención de ese Instituto para garantizar certeza en la integración del órgano edilicio.

Lo anterior, toda vez que los hechos que se exponen a continuación involucran el análisis de requisitos de elegibilidad, la protesta del cargo, la existencia de medidas cautelares no firmes, así como solicitudes ciudadanas que impactan directamente en la **integración y funcionamiento del órgano de gobierno**, materia estrictamente electoral y de competencia de ese Instituto.

I. ANTECEDENTES

1. Instalación del Ayuntamiento y protesta de la Séptima Regiduría

El día 30 de septiembre de 2024, en la sesión pública y solemne de instalación del Honorable Ayuntamiento de José María Morelos, se tomó protesta a la **C. ENGEL EVANEY RHABURN CAUICH** como Séptima Regidora por Representación Proporcional, debido a que el **C. JOSÉ FRANCISCO PUC CEN**, titular original, se encontraba impedido para asumir el cargo, derivado de la medida cautelar de suspensión temporal en el ejercicio del cargo, impuesta por la autoridad de control penal a raíz de la imputación de un probable delito cometido en agravio de la administración pública municipal.

2. Solicitudes del C. JOSÉ FRANCISCO PUC CEN (29 de septiembre, 4 y 12 de noviembre de 2025).

Posteriormente, el **C. JOSÉ FRANCISCO PUC CEN** presentó diversos escritos ante la Secretaría General del Ayuntamiento solicitando que se convoque a sesión de Cabildo a fin de tomar su protesta como Séptimo Regidor, argumentando que el 26 de septiembre de 2025, el Juez de Control resolvió no vincularlo a proceso y que la Unidad de Medidas Cautelares dejó sin efectos la medida cautelar que inicialmente le impedía asumir funciones.

3. Interposición de recurso de apelación.

Contra la resolución de no vinculación a proceso, el ciudadano **WILBERTH MAY BE** interpuso recurso de apelación, motivo por el cual:

- La resolución del 26 de septiembre de 2025 no ha causado ejecutoria, y
- La modificación de la medida cautelar tampoco se encuentra firme, al depender su vigencia de la decisión del tribunal de alzada.

4. Relevancia del artículo 17 LIPEQROO (Requisitos de elegibilidad).

El artículo 17 de la **LIPEQROO** establece que los requisitos de elegibilidad y las restricciones que impiden acceder a cargos Municipales deben acreditarse a partir de resoluciones firmes.

En particular, su fracción **V** exige que las inhabilitaciones derivadas de sanciones administrativas o penales deban constar en sentencia firme.

Si bien esta fracción se refiere a un supuesto específico, de ella deriva un principio general aplicable a todo requisito de elegibilidad:

"no puede considerarse superado un impedimento mientras la resolución que lo elimina no se encuentre firme"

En consecuencia, la situación jurídica del **C. JOSÉ FRANCISCO PUC CEN** no está definida, pues la resolución que invoca para justificar su incorporación está pendiente de revisión en segunda instancia.

5. Situación actual de la Séptima Regiduría.

La **C. ENGEL EVANEY RHABURN CAUICH** continúa ejerciendo legalmente el cargo, derivado de la protesta rendida en la instalación del Ayuntamiento, acto que generó efectos consumados en la integración del órgano edilicio.

6. Necesidad institucional de certeza.

La coexistencia de:

- una regidora en funciones,
- un titular original que nunca tomó protesta,
- una resolución penal no firme,
- solicitudes derivadas de una situación jurídica incierta,

De lo anterior, se hace necesario que el Consejo General del **IEQROO**, en ejercicio de su facultad interpretativa prevista en el artículo **137 LIPEQROO**, aclare el criterio aplicable para determinar la titularidad de la Séptima Regiduría de Representación Proporcional.

(Artículos 17 y 137 LIPEQROO)

Con fundamento en los numerales citados, se solicita respetuosamente a este Consejo General emitir criterio interpretativo respecto de la siguiente cuestión:

1. ¿Quién debe desempeñar la titularidad de la Séptima Regiduría de Representación Proporcional del Municipio de José María Morelos?

Considerando que:

- a) que la **C. ENGEL EVANEY RHABURN CAUICH** rindió protesta y se encuentra actualmente en funciones;
- b) que el **C. JOSÉ FRANCISCO PUC CEN** nunca asumió el cargo, debido a un impedimento legal vigente al momento de la instalación del Ayuntamiento;
- c) que la causa del impedimento no se encuentra definida mediante resolución firme, ya que la no vinculación a proceso está sujeta a un recurso de apelación en trámite; y
- d) que las modificaciones a la integración del Cabildo deben atender a requisitos de elegibilidad basados en resoluciones firmes, conforme al artículo **17 LIPEQROO**.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Requisitos de elegibilidad y firmeza de resoluciones.

El artículo **17 LIPEQROO**, aunque en su fracción V regula particularmente las sanciones por violencia política de género, establece que los requisitos de elegibilidad deben analizarse sobre la base de resoluciones firmes, principio que se extiende a cualquier impedimento para ejercer un cargo público.

2. Protesta del cargo como acto consumado.

La protesta rendida por la **C. ENGEL EVANEY RHABURN CAUICH** constituye un acto formal, válido y consumado, cuya modificación requiere un fundamento firme y definitivo.

3. Imposibilidad de considerar superado un impedimento no firme.

Al existir un recurso de apelación pendiente, la situación jurídica del **C. JOSÉ FRANCISCO PUC CEN** no es definitiva, por lo que no se actualiza un derecho pleno a asumir el cargo.

4. Necesidad de proteger a terceros no emplazados.

La remoción de una persona en funciones requiere procedimiento y garantías que no han sido satisfechas.

V. PETICIÓN

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos **17 y 137 de la LIPEQROO**, respetuosamente solicito al Consejo General del **IEQROO** que, en el ámbito de sus atribuciones:

Emita criterio interpretativo sobre quién debe desempeñar la titularidad de la Séptima Regiduría de Representación Proporcional del Municipio de José María Morelos, atendiendo a:

- 1. los requisitos de elegibilidad basados en resoluciones firmes,**
- 2. la protesta del cargo como acto consumado,**
- 3. la inexistencia de firmeza en la resolución penal invocada,**
- 4. la necesidad de proteger derechos político-electorales y la certeza en la integración del Ayuntamiento.**

Sin otro en particular, quedo atento a lo que este órgano determine.

PROTESTO LO NECESARIO

JOSÉ MARÍA MORELOS, QUINTANA ROO; A 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

C. ROSILENE DE RUBI CARNAVAL PECH"

- II. El quince de diciembre, la Comisión Jurídica ampliada del Consejo General celebró sesión ordinaria, en la cual, entre otras cuestiones, se presentó a consideración la propuesta de respuesta que la Dirección Jurídica de este Instituto elaboró para atender la consulta que motiva el presente Acuerdo.

Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de la integración de la Comisión Jurídica; a partir de lo anterior, la Presidencia de dicho cuerpo colegiado remitió el proyecto que se presenta a consideración del Órgano Superior de Dirección a la Presidencia del mismo, a efecto de que, en su oportunidad, fuera puesto a la consideración correspondiente.

En consecuencia, este Consejo General, por conducto de la Consejera Presidenta del mismo, presenta a la consideración de sus integrantes el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que de conformidad con el artículo 49, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo³, en relación con el precepto 120 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo⁴, el Instituto es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño, encargado de la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las elecciones de la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, Diputaciones Locales, las personas titulares de las Magistraturas y de los Juzgados del Poder Judicial y Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señale la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.

De igual forma, las actividades del Instituto Electoral de Quintana Roo se rigen por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad y se realizan con perspectiva de género.

³ En adelante Constitución local.

⁴ En adelante Ley local.

2. Que de conformidad con el artículo 137, fracción XXIV de la Ley local, este Consejo General tiene la atribución de desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de la normativa electoral local. No obstante, dicha facultad debe ejercerse dentro de los límites que impone el propio marco jurídico.

Sobre el particular de dicha atribución conferida al Órgano Superior de Dirección de este Instituto, conforme a los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se considera que la atención de consultas por parte de los órganos electorales administrativos tiene un carácter administrativo y orientador, por lo que no implica el ejercicio de función jurisdiccional ni la resolución de controversias concretas.

En correlación, el criterio jurídico de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación⁵, establece que, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de desahogar las consultas que le sean formuladas, con el propósito de esclarecer el sentido del ordenamiento normativo electoral; por tanto, a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, sus respuestas pueden ser eventualmente objeto de revisión por la Sala Superior para determinar si se ajustan al orden constitucional y legal en la materia electoral.⁶

La justificación de citado criterio, en lo concerniente al ámbito nacional, establece que, en términos de lo dispuesto en los artículos 17, 41, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁷; así como, 5, 29, 30, 31, 35 y 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que, entre las funciones esenciales del Instituto Nacional Electoral destaca la aplicación e interpretación de la legislación electoral, en su ámbito de competencia; de ahí que, de esa potestad normativa, el Consejo General tiene la facultad de dar respuesta a las consultas que le sean formuladas.

De manera supletoria, citado discernimiento, resulta aplicable para este órgano máximo de dirección, derivado de lo establecido en los artículos 49, fracción II de la Constitución local, 120 y 137, fracción XXIV de la Ley local.

En tal sentido, este Consejo General cuenta con las facultades normativas para pronunciarse a fin de dar respuestas a las consultas que le sean formuladas en torno a la aplicación y desahogo de la Ley local.

En consecuencia, la función consultiva que se atiende mediante el presente Acuerdo, se ejerce, en la consulta que ocupa, de manera general y abstracta, evitando pronunciamientos sobre hechos específicos o sobre la definición de la titularidad del cargo de elección popular a que alude la consulta, dejando a salvo los derechos de las personas involucradas para acudir a las instancias competentes, a través de los medios legales procedentes conforme a la normativa aplicable.



⁵ En lo siguiente, Sala Superior.

⁶ Jurisprudencia 4/2023, de rubro "**CONSULTAS. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE FACULTAD PARA DESAHOGARLAS Y SU RESPUESTA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACIÓN.**" consultable en <https://www.te.gob.mx/jus2021/#/>

⁷ En adelante Constitución General.



3. Que la consulta, solicita emitir un criterio interpretativo respecto de la siguiente cuestión:

¿Quién debe desempeñar la titularidad de la Séptima Regiduría de Representación Proporcional del Municipio de José María Morelos?

Por ello, se solicita, que en términos de los artículos 17 y 137 de la Ley local, este Consejo, emita criterio interpretativo sobre quién debe desempeñar la titularidad de citada regiduría, atendiendo a:

- Los requisitos de elegibilidad basados en resoluciones firmes;
- La propuesta del cargo como acto consumado;
- La inexistencia de firmeza en la resolución penal invocada y;
- La necesidad de proteger derechos político-electorales y la certeza en la integración del Ayuntamiento.

En ese sentido, de la lectura integral del escrito presentado por la Sindicatura del Ayuntamiento de José María Morelos, se advierte que la consulta formulada solicita que este Consejo General determine quién debe desempeñar la titularidad de la Séptima Regiduría de Representación Proporcional de dicho Ayuntamiento, a partir de hechos concretos, personas determinadas y actuaciones vinculadas con resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales distintas a este Instituto.

De ello, se estima necesario precisar que la determinación de la titularidad, sustitución, reincorporación o remoción de integrantes de los Ayuntamientos, cuando deriva de situaciones fácticas individualizadas o de resoluciones de naturaleza penal o administrativa, no constituye materia susceptible de ser resuelta mediante el ejercicio de la facultad interpretativa de este Consejo General, acorde a la normativa invocada en el presente Acuerdo y a los criterios emitidos al respecto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. Desde esa perspectiva, resulta de importancia precisar que, de conformidad con lo expuesto en el numeral anterior, las dudas que se le presenten ante este Consejo, deben versar sobre la aplicación e interpretación de la propia Ley local, con el propósito de esclarecer el sentido del ordenamiento normativo electoral vigente.

Siendo importante resaltar que, conforme al marco normativo vigente, las consultas se emiten en los términos de aclarar sobre el sentido de aplicación desde una perspectiva abstracta, sin resultar pertinente particularizar sobre casos o situaciones concretas, ya que con ello, puede implicar, en su caso, prejuzgar sobre situaciones individuales que eventualmente pudieran ser sujetas a conocimiento de la integración del Órgano Superior de Dirección, a cuyas consejerías se les encuentra vedada tal manifestación de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el particular, es importante referir que la consulta que se atiende no es sobre un precepto de la norma local, no se plantea la consulta sobre la interpretación de una disposición normativa, ni tampoco se plantea la duda sobre la aplicación de dicha norma. Sin embargo, a fin de garantizar el cumplimiento de la facultad del Consejo General establecida por la ley local sobre la cual se motiva el presente Acuerdo, se atiende la consulta única y exclusivamente sobre los aspectos normativos vinculados a la Ley local que sí son materia de interpretación del Órgano Superior de Dirección de este Instituto.

En tal orden de ideas, atendiendo a lo consultado respecto al planteamiento interpretativo relacionado con los artículos 17 y 137 de la Ley local, para que este Consejo, emita criterio sobre los requisitos de elegibilidad basados en resoluciones firmes; la propuesta del cargo como acto consumado; la inexistencia de firmeza en la resolución penal invocada y; la necesidad de proteger derechos políticos-electorales y la certeza en la integración del Ayuntamiento, se expone lo que a continuación se razona.

5. Ante ello, se debe considerar que, el Capítulo Segundo de la Ley local, determina el Procedimiento de Registro de las personas candidatas, dentro del cual, se contempla la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 43 y 136 de la Constitución local, 17 de la propia Ley local y demás criterios aplicables, determinándose, en cada proceso electoral, en su caso, la aprobación del registro de la planilla de candidaturas propuestas¹ por los, partidos políticos y en su caso, coaliciones. E independientes.

Es así que, de conformidad al criterio de la Sala Superior, el análisis de la elegibilidad de los candidatos puede presentarse en dos momentos: el primero, cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos ante la autoridad electoral; y el segundo, cuando se califica la elección, de esa queda garantizado que estén cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, para que la ciudadanía que obtuvo el mayor número de votos pueda desempeñar los cargos para los que son postulados, situación cuya salvaguarda debe mantenerse como imperativo esencial.⁸

De lo anterior se desprende que, este Órgano Máximo de Dirección cuenta con la facultad de analizar los requisitos de elegibilidad de las candidaturas en dos momentos específicos, que se materializan con la definitividad de la etapa correspondiente dentro de los procesos electorales y se integran por actos sucesivos que van adquiriendo firmeza y definitiva en cada etapa de los mismos, y que dotan de derechos y obligaciones a las personas participantes que permiten contender en los mismos. Pues no pudiera concebirse legalmente que se declare electa a una candidatura que no cumpliera con los requisitos previstos en el artículo 17 de la Ley local y demás ordenamientos aplicables vigentes.

⁸ Jurisprudencia 11/97, de rubro "**ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN.**", consultable en <https://www.te.gob.mx/ius2021/#/>

Por ello, citado artículo regula los requisitos de elegibilidad electoral y resulta aplicable para el registro de las candidaturas y posteriormente, para la calificación de la elección, no resultando base para que esta autoridad electoral resuelva conflictos que resulten posteriores a estos dos momentos, como lo pudiera ser la protesta, el ejercicio del encargo, la suspensión, la permanencia o reincorporación al cargo, al tratarse de supuestos jurídicos distintos, que inclusive se encuentran fuera del desarrollo de los procesos electorales.

De ahí toman relevancia el carácter de firme de los Acuerdos emitidos por este Consejo General, por medio del cuales se aprueban las candidaturas, se asignan los cargos de mayoría relativa y representación proporcional, y se declara la validez de las elecciones para la gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial del Estado. Determinaciones que, en términos del artículo 138 de la Constitución local, son sujetas de cadena impugnativa, y posteriormente, en su caso, adquieren validez jurídica plena.

Etapas procesales que se desarrollan de forma sucesiva, mediante el cierre definitivo de cada una de ellas dentro de los procesos electorales, y que, en virtud del principio de preclusión, y la definitividad y firmeza de los mismos, se impide el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados, y que deriva en la pérdida de la facultad procesal, en el caso particular, de este Consejo General. Bajo esa tesitura, la cuestión planteada en este momento resulta notoriamente extemporánea y fuera de competencia de esta autoridad.⁹

6. Por otra parte, no pasa desapercibido que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Constitución General, no compete a esta autoridad la investigación, esclarecimiento ni demostración de presuntos hechos delictivos, dado que rompería con los principios de constitucionalidad y legalidad a los que está sujeta la función de esta autoridad electoral.¹⁰

En ese sentido, emitir un pronunciamiento sobre quien debe ocupar un cargo edilicio electivo específico en la circunstancia de la consulta, implicaría el análisis y valoración de hechos concretos, así como de los efectos jurídicos de actos y/o resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales ajenas al ámbito electoral administrativo, lo cual excedería las atribuciones de este Consejo General y podría dar lugar a un prejuzgamiento indebido. Por lo que, existe un impedimento legal para pronunciarse sobre la titularidad concreta de la Séptima Regiduría del Ayuntamiento de José María Morelos, al tratarse de un caso individualizado cuya resolución corresponde, en su caso, a las instancias legalmente competentes, rebasando la facultad consultiva de esta autoridad.

⁹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002, Tesis: 1a./J. 21/2002, "**PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.**"

¹⁰ Similar criterio adoptado por la Sala Superior en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral del Expediente SUP-JRC-106/97

Precisando que, la facultad interpretativa de este Consejo General se circunscribe a la aplicación e interpretación abstracta de las disposiciones de la legislación electoral local, particularmente del artículo 17 de la Ley citada, el cual regula requisitos de elegibilidad en el marco del procedimiento electoral, sin que resulte aplicable para resolver situaciones relacionadas con el ejercicio del cargo o la integración concreta de un Ayuntamiento en funciones.

Ello porque, los criterios manifestados, como lo son la propuesta del cargo como acto consumado y la inexistencia de firmeza en la resolución penal invocada, no resultan materia que verse sobre la aplicación e interpretación de la Ley local, con el propósito de esclarecer el sentido del ordenamiento normativo electoral vigente, dado que como lo refiere la propia consulta, son asuntos que guardan relación y dependencia de la decisión del tribunal correspondiente, por lo que no es motivo de pronunciamiento de este Consejo General.

Finalmente, en el contexto de la más amplia tutela y protección de los derechos políticos electorales de las personas ciudadanas involucradas en el caso, este Consejo General, deja a salvo los derechos de los mismos para acudir ante las instancias jurisdiccionales correspondientes para salvaguardar sus derechos mediante los mecanismos procesales previsto en la normativa aplicable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Consejo General del Instituto emite el presente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba en sus términos el presente Acuerdo, para los efectos correspondientes.

SEGUNDO. Se declara la incompetencia normativa de este Consejo General para determinar, mediante el ejercicio de su facultad interpretativa, respecto de la titularidad del cargo de la Séptima Regiduría de Representación Proporcional del Municipio de José María Morelos, al tratarse de un caso individualizado que excede el ámbito de atribuciones previsto en el artículo 137, fracción XXIV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y al haberse precluido la facultad procesal para el análisis y verificación de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas involucradas en el marco del Proceso Electoral Local dos mil veinticuatro.

TERCERO. Se determina, en el contexto de la más amplia tutela y protección de los derechos políticos electorales de las personas ciudadanas involucradas en el caso, dejar a salvo los derechos de los mismos para acudir ante las instancias jurisdiccionales o administrativas correspondientes para salvaguardar sus derechos mediante los mecanismos procesales previsto en la normativa aplicable

CUARTO. Se instruye a la Consejera Presidenta, para que mediante atento oficio notifique el presente Acuerdo, a la Síndico Municipal del Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo, para los efectos conducentes.

QUINTO. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo y su anexo respectivo, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al Titular del Órgano Interno de Control de este propio Instituto.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo y su anexo respectivo en los estrados y en la página oficial de Internet del Instituto Electoral de Quintana Roo.

SÉPTIMO. Cúmplase lo acordado.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Rubí Pacheco Pérez; las Consejeras Electorales Maisie Lorena Contreras Briceño, María Salomé Medina Montaño, Nora Leticia Cerón González y Patricia del Rocío Cortes Pastrana, así como el Consejero Electoral Julio Asrael González Carrillo, integrantes del Consejo General del del Instituto Electoral de Quintana Roo; en sesión ordinaria celebrada el día dieciocho del mes de diciembre del año dos mil veinticinco en la Capital del Estado de Quintana Roo.



**MTRA. RUBÍ PACHECO PÉREZ
CONSEJERA PRESIDENTA**



**LIC. GUADALUPE IRMA ESQUIVEL MONROY
SECRETARIA EJECUTIVA**

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACUERDO IEQROO/CG/A-038-2025, DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA POR LA SÍNDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS DE FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

